

**Democracia, equidad y política social**  
**Lic. Norma Ruiz Velázquez**  
**Premio INAP 1999**



Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  
Señor Presidente del Instituto Nacional de Administración  
Pública,  
Distinguidos miembros del presidium,  
Señoras y señores:  
Buenas tardes a todos.

En esta oportunidad, quiero agradecer al Señor Presidente su recibimiento, el cual constituye un valioso estímulo en el ámbito administrativo. Agradezco también al Instituto Nacional de Administración Pública por honrarme con esta distinción, particularmente a su Consejo Directivo, presidido por el Licenciado José Natividad González Parás, y a los miembros del Jurado del Premio INAP, Certamen que cumple 24 años promoviendo el desarrollo de la investigación en administración pública.

Asimismo, quiero reconocer a la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, donde cursé la licenciatura en sociología, porque en ella fui formada como una profesionista seria, reflexiva y, sobre todo, sensible a la problemática social.

Desde luego, la situación por la que atraviesa nuestra máxima casa de estudios genera en muchos de nosotros sentimientos de impotencia e indignación, pero confío en que autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes sepan acordar las normas que favorezcan la calidad académica de nuestra universidad, sin demérito de la importante función de atención y movilidad social que ésta tiene asignada, y con la cual ha cumplido cabalmente durante décadas.

Recibir este Premio en los momentos por los que atraviesa México, causa en mí una doble emoción, pues veo con agrado que el desarrollo de nuestras instituciones electorales nos ha permitido ejercer con confianza, responsabilidad y tolerancia el derecho a determinar qué tipo de gobierno queremos. Sin embargo, lo más importante de los cambios políticos no son ni los partidos ni las personas a quienes involucra, sino el que éstos nos garanticen que el desarrollo social y el combate efectivo a la pobreza sean prioridades de las políticas estatales en su conjunto.

En relativamente poco tiempo, hemos dado grandes pasos hacia una mayor competitividad y equidad electoral. De igual forma, debemos consensar y tomar las medidas pertinentes para alcanzar una mayor competitividad y equidad social.

Por lo tanto, la democracia no puede concebirse sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico y cultural del pueblo.

Más allá del sistema electoral que hemos logrado construir, es preciso avanzar hacia una democracia con contenido social, que posibilite cambios en la política económica, a fin de garantizar a la población un desarrollo físico e intelectual adecuado, oportunidades de trabajo y acceso a los servicios públicos para la atención social.

Desde mi punto de vista, todo Estado tiene el deber de vigilar la equidad social, promover la redistribución del ingreso y combatir la pobreza. En este sentido, el gobierno mexicano

encabezado por el Doctor Zedillo ha emprendido importantes esfuerzos, como es el Programa de Educación, Salud y Alimentación. No obstante, en el umbral del siglo XXI, el principal desafío de México sigue siendo el combate a la pobreza, a la concentración del ingreso y a la desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población.

Toda inserción económica y toda transición democrática requieren sustentarse en un piso de equidad social que permita dar continuidad a los procesos de transformación globales. La persistencia de la pobreza, en cambio, constituye una de las principales limitaciones para fincar el desarrollo sobre bases firmes y poder crear las condiciones que promuevan la redistribución del ingreso y garanticen el principio de equidad entre las personas.

Este fenómeno, de profundas raíces, se manifiesta tanto en las asimetrías de acceso a los bienes y servicios como en la frágil inserción de la población en el sistema productivo, lo que indica que la pobreza constituye un problema público que rebasa los alcances de la política social. La política económica, a través del fomento del empleo y de proyectos productivos populares, tiene también un papel que cumplir como parte de una estrategia integral de desarrollo, destinada a combatir la desigualdad social desde diversos frentes.

Por ello, en mi propuesta en torno al desarrollo social y el combate a la pobreza considero que es importante fortalecer los programas focalizados creados para disminuir la pobreza extrema, así como mejorar el acceso a las instituciones de atención social, a fin de detener el surgimiento de nuevos pobres, pero más importante aún es orientar la política

económica hacia la satisfacción de las demandas de la población más necesitada, no sólo de los requerimientos del mercado, lo que implica revisar las estrategias de inserción en la economía mundial y los proyectos locales de desarrollo, buscando un equilibrio entre mercado y sociedad que posibilite un crecimiento económico con sustentabilidad social y política.

Sin duda, el quehacer de los administradores públicos engloba muchos de los esfuerzos que se han emprendido para combatir la pobreza, pues en ellos recae la tarea de hacer realidad los postulados de eficiencia y equidad a partir de los cuales definir los diagnósticos, estrategias, prioridades y métodos orientados a construir una sociedad más justa. Para ello, es preciso contar con un servicio público eficaz, transparente, oportuno, democrático y sensible frente a las necesidades de la población, capaz de conducir una nación viable y digna.

Señor Presidente: quiero agradecer nuevamente este honor y a todos ustedes, su amable atención.